

Índice AI: ASA 11/017/2006 - Mujeres defensoras de los derechos humanos en Afganistán

Fecha de comienzo: 24/10/06

Web Publisher Category: HRDs features

Text in red are comments for translators – please do not translate these, but leave (in English) in the translated document so the web team can easily identify parts of the document when creating the web page.

NB: Remove ALL the text in red when entering the documents into Amnistía InternacionalDOC (including this note)

[Action title]

Afganistán: los retos que supone defender los derechos de las mujeres en Kandahar

[Action extract]

Las mujeres defensoras de derechos humanos en Afganistán se encuentran atrapadas entre una ausencia casi total de seguridad personal, el resurgimiento de ataques de los talibanes y los homicidios resultantes de acciones militares.

[Action text]

El homicidio de Safiye Amajan a manos de los talibanes el 25 de septiembre de 2006 pone de manifiesto una vez más los peligros que corren las defensoras de derechos humanos en Afganistán. Safiye Amajan, directora provincial del Ministerio de Asuntos de la Mujer en la provincia de Kandahar en el sur del país, había dirigido una escuela desde su casa durante el período de gobierno talibán. Posteriormente dirigió proyectos del Ministerio de Asuntos de la Mujer en la provincia de Kandahar, que incluyeron el establecimiento de escuelas y la educación de cientos de niñas y mujeres. También abrió centros de formación profesional que permitieron a las mujeres desarrollar aptitudes que hasta entonces estaban fuera de su alcance.

Las defensoras de derechos humanos en Kandahar –así como en otras regiones de Afganistán– se encuentran atrapadas entre una ausencia casi total de seguridad personal, el resurgimiento de ataques de los talibanes y el homicidio de hombres y mujeres civiles a consecuencia de acciones militares emprendidas por la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF).

El 3 de octubre, una destacada defensora de los derechos humanos en Kandahar envió una carta a Amnistía Internacional en la que describía “los desafíos que supone defender los derechos de las mujeres en la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán”. Decía lo siguiente:

[...] al defender los derechos humanos de las mujeres, uno de mis objetivos es dar a conocer al mundo civilizado la realidad que se vive en esta parte del mundo. Pero, por favor, que no aparezca mi nombre [...] basta con decir ‘una defensora de los derechos humanos en Kandahar’. Es necesario para que mi seguridad esté protegida en medio de una situación tan imprevisible como ésta.

En su carta, decía asimismo:

A pesar de lo mucho que se ha deteriorado la seguridad en la ciudad de Kandahar, yo sigo trabajando por los derechos de las mujeres con cautela y rodeada de amenazas reales. En nuestra lucha por los derechos sociales, económicos y políticos de las mujeres, nos reunimos en casas particulares para por lo menos expresar y analizar algunos de los asuntos fundamentales relacionados con nuestros derechos cívicos y para buscar algunas, aunque escasas, maneras de protegerlos.

Para las mujeres de la provincia de Kandahar, la amenaza real hoy es su protección y seguridad general mientras se encuentran fuera de casa; la seguridad en medio de la amenaza terrorista de reagrupaciones talibanes extremistas y el enfrentamiento permanente entre fuerzas del gobierno y activistas armados en la región. Por eso, las mujeres no se atreven a salir de sus casas o a mandar a sus hijas al colegio. Por otro lado, la inseguridad que sufren las mujeres en cuanto al trabajo y el sustento ha debilitado aún más su estado en esta sociedad conservadora.

Casi todos los días se producen ataques suicidas, atentados con bombas y enfrentamientos armados que siempre se saldan con la muerte de un gran número de civiles, incluidas mujeres y niñas. Durante las entrevistas que mantuve recientemente con familias desplazadas del distrito de Panjwaie –región que ha sido escenario de combates intensos entre talibanes y fuerzas gubernamentales y extranjeras– tuve oportunidad de conocer a algunas procedentes de la población de Pashmol que habían perdido a sus hijas en el caos que se produjo cuando se disponían a huir de los bombardeos aéreos. Aunque los enfrentamientos graves han terminado, sus hijas permanecen desaparecidas y no saben quién se las ha llevado.

En otro brutal incidente ocurrido en Zangawat, población del distrito de Panjwaie, una familia entera compuesta por 22 miembros murió durante el ataque aéreo lanzado por aviones de la OTAN equivocando su objetivo. Entre las personas muertas se encontraban siete mujeres, algunas embarazadas, y otra que estaba dando a luz en el momento de producirse el bombardeo. En los últimos tres meses, decenas de mujeres y menores han sido víctimas mortales directas de los enfrentamientos. Las escuelas de niñas en zonas rurales o bien son incendiadas o bien se cierran debido a las continuas amenazas recibidas de los talibanes. Personas residentes en zonas devastadas por la guerra dicen “odiamos tanto (sic) a los talibanes como a las fuerzas del gobierno de coalición”.

También he confirmado denuncias procedentes de varios distritos urbanos según las cuales, en los últimos nueve meses, se han encontrado los cuerpos sin vida de siete mujeres en distintas partes de la ciudad, sin que nadie se haya responsabilizado de su homicidio. En la mayoría de los casos, se sospecha que tenían relación con la violencia doméstica y los homicidios terroristas más recientes a manos de los talibanes cuyo objetivo era impedir que las mujeres salieran de su casa a trabajar para ganarse el sustento.

En mi lucha para que las mujeres de Kandahar conozcan sus derechos y alcen su voz ante el gobierno, he planteado estos motivos de preocupación a las autoridades locales y al gobernador en varias ocasiones. Dicen: “estamos trabajando intensamente tanto en lo militar como en lo político para reforzar la seguridad y todo irá mejor una vez que se hayan solucionado estos problemas”. Esta declaración, a menudo repetida por representantes del gobierno, ha perdido credibilidad para los residentes debido a su fracaso manifiesto.

En lo que respecta a mi seguridad personal, sigo estando sola. El gobierno no me ha proporcionado protección armada ni yo puedo permitirme pagar a un servicio de seguridad privado que me acompañe permanentemente. En los últimos meses he recibido amenazas telefónicas desde números desconocidos, y algunas personas también me han amenazado de muerte si no abandono mi trabajo por los derechos de las mujeres. Como medida de precaución, intento pasar desapercibida hasta que la situación sea lo suficientemente segura como para moverme con libertad.

Lo trágico es que la experiencia de esta defensora de derechos humanos no es única. La homóloga de Safiye Amajan en la provincia vecina de Helmand, también en el sur de Afganistán, había recibido amenazas de muerte, algunas de las cuales se repitieron tras el homicidio de Safiye Amajan. Se han recibido informes según los cuales las directoras provinciales del Ministerio de Asuntos de la Mujer en las provincias de Nimrouz, Farah, Zabul, Khost, Uruzgan, Paktia, Logar y Paktika han recibido amenazas de muerte de hombres armados no identificados. Unidas, estas provincias representan la totalidad del sur, así como partes del centro y este del país.

La colega de Safiye Amajan en la provincia oriental de Nuristán dijo a Amnistía Internacional que habían amenazado su seguridad a través del móvil, de "cartas nocturnas" – mensajes escritos durante la noche en paredes de lugares públicos– y de mensajes entregados en mano en su lugar de trabajo.

Proporcionar protección de forma viable a las defensoras de derechos humanos – incluidas empleadas del gobierno como Safiye Amajan– en todo el territorio afgano es una tarea compleja. En un entorno en el que el gobierno es incapaz de garantizar el Estado de derecho o de proporcionar protección eficaz al colectivo de defensores de los derechos humanos, se ha dejado a estas personas la decisión sobre cuál es la mejor manera de protegerse.

Las defensoras de derechos humanos, incluidas aquellas que ocupan puestos en el gobierno cuya misión es mejorar los derechos de las mujeres, viven cerca de sus compañeros y compañeras de trabajo y están en su compañía a diario. Están expuestas y no hay ninguna medida de seguridad que les garantice protección las 24 horas del día. Se enfrentan a la perspectiva de necesitar protección de guardias armados, lo que constituye un grave motivo de preocupación para la comunidad afgana de defensores y defensoras de derechos humanos.

Algunas medidas pueden contribuir a llamar la atención sobre ellas y con ello aumentar su situación de riesgo. En el contexto de Kandahar, proporcionar seguridad a una defensora de derechos humanos en un entorno en el que grupos armados de oposición al gobierno están activos no es una opción viable. Según informes, las autoridades provinciales de Kandahar han intentado que se atiendan y escuchen los motivos de preocupación de los colectivos de mujeres, y para ello han sugerido que sus reuniones se celebren en dependencias del gobierno. Sin embargo, algunos grupos de mujeres de la ciudad temen ser vistos en estos edificios. En opinión de una defensora de derechos humanos de Kandahar, si son vistas en estos lugares "pronto correrán la misma suerte que Safiye Amajan".

Las mujeres afganas que luchan pacíficamente por defender sus propios derechos o los de otras personas en Afganistán son objeto de hostigamiento, intimidación y agresiones desde hace décadas. Algunos grupos armados afganos han centrado sus ataques en las defensoras de derechos humanos. La última ola de ataques contra ellas pone de manifiesto su vulnerabilidad en Afganistán. Amnistía Internacional opina que los grupos armados que han sido los principales responsables de este ciclo de violencia contra defensoras de derechos humanos tienen la responsabilidad indiscutible de ponerle fin.

Por todo ello, Amnistía Internacional insta, en primer lugar, a todos los grupos armados de Afganistán a que dejen de utilizar para siempre la violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos, cualquiera que sea su programa o ideología política.

Amnistía Internacional también hace un llamamiento a representantes de la comunidad internacional en Kabul, en consulta y colaboración con el gobierno afgano y con defensores y defensoras de derechos humanos de Afganistán, para que faciliten un nuevo enfoque a la hora de desarrollar y aplicar medidas prácticas que puedan servir al gobierno afgano para ampliar la protección prestada a la comunidad de defensores de los derechos humanos, y a los defensores y defensoras de los derechos humanos para buscar maneras más eficaces de protegerse cuando no haya otra forma de protección.

El futuro: las mujeres pasan a un primer plano

El colectivo de defensores de los derechos humanos –mujeres y hombres– desempeña un papel vital antes, durante y después del conflicto.

Toda persona que defiende los derechos humanos se enfrenta a mayores presiones y riesgos durante un conflicto armado. Sin embargo, a pesar de correr enormes riesgos personales, las mujeres están en el centro del movimiento de derechos humanos y piden justicia como respuesta a las violaciones de derechos humanos que sufren. Defensores y defensoras de los derechos humanos también pueden sufrir ataques y amenazas a manos de grupos armados por motivo de sus actividades, o éstos pueden intentar controlar su comportamiento, restringir su libertad de circulación y atacarlos expresamente por defender los derechos humanos de las mujeres.

Grupos de mujeres de todo el mundo se han unido traspasando fronteras nacionales, étnicas, políticas y religiosas para reivindicar el derecho de las mujeres a participar en los procesos de paz y ayudar a poner fin a los conflictos.

Amnistía Internacional y el conflicto en Afganistán

Amnistía Internacional pide a las partes en el conflicto en Afganistán que cumplan sus obligaciones dimanantes de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Amnistía Internacional condena cualquier tipo de ataque intencionado contra la población civil, tanto a través de atentados con bomba en lugares públicos o estaciones de tren como mediante la destrucción de edificios y el homicidio de personas. El ataque intencionado contra la población civil constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales y es contrario a los principios básicos de humanidad. Amnistía Internacional hace un llamamiento para que los autores de tales atrocidades sean procesados en procedimientos justos. El ataque intencionado contra la población civil no puede justificarse nunca.

Amnistía Internacional insta a todos los Estados, grupos armados y personas a que dejen de utilizar la violencia contra la población civil para conseguir sus objetivos. La violencia y el terror sólo generan más violencia y más terror.

Amnistía Internacional pide a los dirigentes de grupos armados que denuncien los abusos contra los derechos humanos –incluida la tortura, la toma de rehenes y los ataques intencionados o indiscriminados contra la población civil– y que actúen para impedir que sus autores los repitan. En la medida de lo posible, Amnistía Internacional aborda sus motivos de preocupación directamente con los dirigentes de estos grupos.

Con carácter prioritario, Amnistía Internacional insta a todos los gobiernos a que no respondan al terror con terror. Ha expuesto y condenado reiteradamente las violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la seguridad, así como las medidas que debilitan derechos humanos fundamentales, como la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Con respecto a las ofensivas lanzadas por todas las fuerzas extranjeras en Afganistán, Amnistía Internacional ha recordado reiteradamente a las autoridades que tienen la obligación legal de observar en todo momento las normas de todos los tratados de aplicación en materia de derechos humanos y de derecho humanitario en los que sean Estados Partes, así como las normas del derecho consuetudinario internacional de aplicación para todos los Estados. El gobierno afgano y los dirigentes de las fuerzas extranjeras deben dar instrucciones claras a sus fuerzas en el sentido de:

- prohibir cualquier ataque (incluido como represalia) contra la población civil u objetivos civiles;
- prohibir ataques que no distinguan entre objetivos militares y la población civil u objetivos civiles (ataques indiscriminados);
- prohibir ataques que, aunque dirigidos contra un objetivo militar, tengan un impacto desproporcionado sobre la población civil u objetivos civiles;
- prohibir ataques contra objetivos indispensables para la sobrevivencia de la población civil;
- prohibir ataques utilizando armas de efectos intrínsecamente indiscriminados;
- tratar con humanidad a todas las personas presas, heridas y a las que quieren entregarse; nunca debe ejecutarse a los presos ni retenerlos como rehenes, como tampoco torturarlos o someterlos a un trato inhumano y que atente contra su dignidad personal, en particular, el trato humillante y degradante;
- tomar todas las demás medidas necesarias para proteger a la población civil contra los peligros derivados de las operaciones militares, incluida la de no señalar objetivos militares entre concentraciones civiles;
- castigar todo incumplimiento de las leyes de guerra y garantizar el enjuiciamiento de los responsables.

Amnistía Internacional hace hincapié en que todas las personas detenidas durante y después de las operaciones, sin excepción, sean tratadas en todo momento como seres humanos respetando plenamente sus derechos, en consonancia con las disposiciones pertinentes contenidas en los Convenios de Ginebra y en el derecho internacional de los derechos humanos.

[Image caption and copyright]



Mujeres en las calles de Kabul